



**ESCENARIOS, SUJETOS, DESENLACES
(REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS CENTROAMERICANA)**

Edelberto Torres-Rivas

Working Paper #68 – March 1986

Edelberto Torres-Rivas is perhaps Central America's most renowned social scientist. He is a native of Guatemala, a member of the Instituto de Investigación Social (ICADIS) in Costa Rica, director of the review Polémica, and the author of numerous works on Central America. He was a Fellow of the Kellogg Institute during the Spring 1984 semester.

ABSTRACT

This paper analyzes the current political crisis in Central America. The paper begins with an examination of the roots of the crisis, seen as stemming not from the contradictions of a liberal state, but rather from the nature of the social formation. The author argues that modernization in Central America did not lead to politically open states; on the contrary, modernization did not change the fundamental character of political domination, leading to a serious crisis of hegemony by the 1960s. The next part of the paper analyzes the new social actors of the 1970s, focusing on the popular organizations and revolutionary movements. The author concludes with a discussion of the way different political forces are addressing the crisis.

RESUMEN

El campo de fuerza donde la crisis política se constituye en Centroamérica, está precedido por reiteradas luchas contra el estilo oligárquico y la cultura política autoritaria que ese estilo supone. Este trabajo propone la interpretación de que el escenario de la crisis es un escenario de luchas democráticas frustradas, de pequeños y grandes conflictos para lograr la participación/representación popular. El ensayo plantea en su parte central el tema de la movilización popular-revolucionaria y las interpelaciones que finalmente constituyen al sujeto de la acción política. En la parte final se discute el sentido de futuro que esta acción adquiere en el seno de una abierta ofensiva thermidoriana; el desenlace está planteado ya no solo como una lucha entre fuerzas sociales internas sino también entre actores externos partidarios de una solución violenta y no del diálogo o la negociación.

INTRODUCCION

La crisis centroamericana va quedando constituida desde mediados de la década de los setenta como una crisis política.¹ Se trata de una crisis que afecta gradualmente todos los órdenes de la sociedad y por lo tanto no tiene paralelo con la historia anterior de desajustes institucionales, de golpes de Estado, de inestabilidad gubernamental. Estos hechos fueron rasgos característicos de largos trechos de la vida política de la región. Sin embargo, en diversos momentos posteriores a 1970 el desajuste fue marcado por dos hechos que sin duda guardan estrecha y recíproca determinación: el reforzamiento hasta límites no conocidos de la superestructura autoritaria del Estado, por un lado, y la activación de las masas populares, de manera armada, por el otro. Ambos fenómenos definen los límites de la crisis.

En algunos análisis de sociología política, se ha insistido en una articulación estructural entre la forma autoritaria del Estado y la crisis política. En esa óptica, la forma democrática del Estado burgués solamente deja de expresarse como tal y se reviste de un ropaje autoritario para responder, excepcionalmente, a ciertas crisis de características especiales. La esencia de tal crisis es una amenaza –real o percibida como tal– al orden existente por parte de organización de las clases dominadas. La percepción de la amenaza, la autoconciencia del peligro, es sin duda más importante que la magnitud real del movimiento social contestatario; la experiencia

histórica prueba de manera harto frecuente, y Centroamérica constituye una trágica confirmación de esto, que la respuesta defensiva tiende a ser desproporcionada en sus efectos.

La reacción a la crisis ha sido la implantación de una forma particular de Estado, el Estado-de-excepción, acerca de cuya caracterización particular está lejos de haber coincidencia. Se sabe que el Estado-de-excepción es una forma extrema de estabilizar el régimen político, pero no necesariamente el mecanismo para resolver/absorber la crisis. Existen, en consecuencia, diferencias de calidad y relaciones históricas entre el Estado autoritario del tipo que se produce en Centroamérica y la crisis a la que corresponde. No ha avanzado la reflexión regional en lo relativo al primero de los términos de la relación: la naturaleza del Estado-de-excepción que se expresan en la forma de dictaduras militares con fachada legal. Es más frecuente el tipo de análisis sobre la crisis, su naturaleza, su desarrollo.

En la historia centroamericana, los rasgos autoritarios del sistema político no derivan a última hora de la crisis del orden democrático-liberal, sino de la manera como se constituyó la estructura social y la dominación correspondiente. Con esto no se postula que el Estado autoritario es constitutivo a la conformación nacional-estatal y, por lo tanto, que lo democrático es desconocido para las clases, los partidos y la ciudadanía política *latusensu*. Solamente queremos apuntar a la intención de este análisis, contenida en tres postulados generales que derivan, tal vez a manera de síntesis y no de hipótesis de trabajo, de la experiencia histórica

contemporánea. Aquí, pues, hablamos de la crisis y de los conflictos de la década de los setenta.

En primer lugar, la crisis de la cúpula es una crisis de hegemonía, en su doble manifestación de desarticulación dirigente de una fracción burguesa en el interior del conjunto de la clase y de pérdida de control dominante en el interior del conjunto de la sociedad. Por la otra, la crisis se constituye a medida que se van desarrollando movimientos sociales de carácter popular-revolucionario, lo que obliga a un examen histórico y particular de este tipo de movilización de masas, por sus programas, métodos, sitios, alternativas. Finalmente, el desenlace de la crisis, por las condiciones de extrema violencia militar, en un cuadro de deterioro social y económico y de intervención extranjera, sólo puede ser percibida como el colapso de uno de los contendientes: es la lucha por el control del Estado, lo que plantea o su destrucción o su mantenimiento, a costa de una inmensa derrota popular o de un desmoronamiento del sistema capitalista mismo. En ambos casos, se abren períodos de transición hacia un nuevo tipo de sociedad.

El Escenario

El campo de fuerzas donde la crisis se va constituyendo y donde finalmente las alternativas de recambio popular quedan planteadas, está caracterizado por un doble conjunto de rasgos contradictorios y mutuamente referidos. Por un lado, la naturaleza histórica y particular de la crisis de hegemonía de la burguesía y por el otro, el

carácter del sujeto revolucionario que finalmente actúa en el seno de la crisis. El carácter de la dominación de clase, en su expresión estatal y en el manejo genérico de los recursos de tal dominación, entraron en crisis en Centroamérica, en la segunda postguerra. Este tema ya ha sido analizado in extenso como el problema de la crisis de la oligarquía y de su estado, como la erosión de un sistema de dominación que, en su momento constitutivo, se asocia a la articulación nacional, al mercado mundial y a la formación de las haciendas cafetaleras.

La manera como se resolvió a finales del siglo XIX el problema de la producción/comercialización de una agricultura volcada hacia el exterior contribuye a explicar cómo se conforma la estructura agraria, el tipo de mercado de trabajo, el espacio jurídico-institucional, el sentido cultural de la nación que emerge, en síntesis, la naturaleza de la dominación social y política en los distintos países de la región.

Pero la gravitación de la fracción agraria a mitad de los setenta, en este Siglo, ya no es la misma; mantiene sin duda una cierta cuota de poder político que no guarda proporción con la importancia de la agricultura comercial de exportación. Dejó de ser la fracción dirigente, pero la magnitud de sus intereses sectorialmente multiplicados y las relaciones que mantiene con el resto de las fracciones de clase (o su vinculación con las otras clases, especialmente los sectores medios) continúan dándole vigencia a su existencia social. De la propiedad terrateniente emerge, por así decir, la mejor y más activa defensa de los privilegios sociales, la

cultura y los valores que nadie discutió en el pasado y que al formar parte de la dominación, también han entrado en crisis.

Los grandes propietarios rurales no han desaparecido como tal aunque parcialmente el latifundio y las relaciones de trabajo hayan experimentado modificaciones sustantivas. El desarrollo del capitalismo modificó la dinámica de la acumulación de capital en el agro y con ello, la tradicional articulación productiva del extenso campesinado centroamericano. En efecto, el capital comercial se independiza de la tierra y busca su valorización en las nuevas oportunidades de la inversión industrial. Por discutible que sea en otra perspectiva, el crecimiento industrial centroamericano, sin duda el proyecto de mercado común regional fue oportuno más que lograda para la gradual diversificación burguesa. En el transcurso de dos generaciones (comienzos de la década de los cincuenta a finales de los setenta), la burguesía creció y cambió, sin que en su metamorfosis cambiaran las formas de ejercicio de la política y del poder, la naturaleza del Estado, en síntesis, esa estructura de dominación que han hecho de algunas sociedades centroamericanas sociedades políticamente bloqueadas.²

Es esta característica la que debe ser analizada para entender como las luchas por la democracia y por reivindicaciones económicas, propias de una escena política democrática y burguesa, sólo se dieron parcialmente hasta producirse la contradicción que llevó a la crisis. Si la escena política concierne a las modalidades concretas de representación de las fuerzas sociales en pugna, sea a través de los partidos políticos, sea por medio de la acción gremial y corporativa,

lo cierto es que la democracia liberal define un tipo de escenario que asegura un juego previsible a los actores. En periodos breves, los partidos de la oligarquía y sus conflictos definieron un tipo de democracia que reservó sus favores a unos pocos. Con el desarrollo, las pugnas intraoligárquicas fueron gradualmente sustituidas por los conflictos inter-clases y el sentido de la escena política cambió.

Las formas de Estado, afirma Poulantzas,³ marcan los límites de ese espacio particular que es la escena política, *locus bellum* que señala, por detrás de las apariencias, las verdaderas relaciones entre los contendientes y el aparato de poder. Es decir, la fisonomía de quienes entran en liza, corpulentos o entecos, sus voluntades estruendosas en la plaza o percibidas en el silencio de la conspiración, dan contenido a un espacio que los actores, sin embargo, no definen. Y a una actuación de la que sólo por momentos son conscientes.

Según nuestro leal saber y entender, las luchas por la democracia definen en la post-guerra la escena política, tanto porque los portadores de tal ideal -en abstracto- son ahora distintos, como porque la manera de relación entre las clases tradicionales -campesinos y señores de la tierra- se ha alterado. En otras palabras, la re-constitución del poder en un sentido democrático, participatorio, legal y legítimo, se está intentando desde las caídas de las dictaduras militar-oligárquicas de 1945-48. No son las rupturas en el interior de la burguesía lo que explican la crisis de la dominación (llamada 'oligárquica'. Ni siquiera el declinante carácter hegemónico de la fracción agraria. Por el contrario, es la fuerza de sus intereses

sectoriales y de su visión hegemónica puesta en cuestión, la persistencia de recursos tradicionales de dominio que se revelan, lentamente, ineficaces lo que otorga a la crisis su sentido inicial y luego una creciente dimensión transclasista que adelante explicamos.

En los tres países bajo análisis, la re-constitución democrática del poder -que se busca en la postguerra- adquiere diversas expresiones críticas y está marcada por sucesivas frustraciones. En Guatemala, ésta fue más profunda por la derrota violenta del movimiento popular en 1954 y porque a partir de esta fecha se va creando un prematuro clima de contrarrevolución. En Nicaragua, la amplitud de la demanda democrática incluyó por un largo período el liderazgo burgués (del partido conservador) en la oposición a la dictadura, lo que creó espacios democráticos reiteradamente frustrados. En El Salvador, el control militar desde 1982, al estabilizarse después de 1960 se abrió al juego de una oposición demócrata cristiana, cuya fuerza electoral nunca fue respetada. En los tres países se fueron acumulando tensiones derivadas de lo que podríamos llamar una crisis social en ascenso nunca resuelta, pero disociada de la crisis política. Las luchas por ampliar la participación popular son luchas por la democracia.

Tales reivindicaciones se convirtieron paulatinamente en luchas de masas. Y tendieron también lenta o rápidamente a confundirse con las tensiones sociales derivadas del modo perverso como funcionaba el sistema económico. De hecho, la escena política estuvo dominada por actores sociales que no buscaban cambiar el Estado sino al régimen.⁴

Se trata de una distinción necesaria que sugiere Salama, y que resulta útil para distinguir el Estado capitalista, como una abstracción que se concreta en la realidad de la lucha de clases, bajo la forma de régimen político; éste último sería la expresión fenomenológica del Estado, de tal suerte que las crisis políticas que precedieron la crisis revolucionaria de los setenta, tuvieron como interlocutor al régimen político (y al gobierno que lo representa).⁵ Era la naturaleza del régimen autoritario del gobierno militar lo que impidió de manera reiterada que la escena política se ampliara para dar cabida a aquellos actores que se resistían a ser el público de su propio drama. Y que pugnaron por vías legales y pacíficas su derecho a escribir parte del libreto y a producir un parlamento que por fuerza de las armas se había convertido en monólogo.

No olvidemos que la crisis de la dominación oligárquica, definida en otras oportunidades, es justamente el reverso de estas luchas populares, cuya fuerza revela una creciente dificultad para la incorporación del conjunto de las fuerzas populares; o bien, de los sectores sociales urbanos más activos; o, por último, de sus representantes políticos conspicuos. Tuvieron a la mano la cooptación, la manipulación electoral, la corruptela burocrática. Nada intentaron y ni unos ni otros lograron ser admitidos como oposición tolerada y absorbida. No pudieron ser incorporados a las correas de transmisión que ideológicamente reproducen el sistema dominante. Este bloqueo histórico afecta de manera particular a la pequeña burguesía intelectual, a la clase media que pasó por la universidad, cualquiera que sea su éxito profesional. Debe subrayarse

que la violencia revolucionaria, cuando se intenta, constituye más allá de toda otra consideración, una forma de conciencia política. Ese despertar es más fácil –y más inmediato– entre los representantes de la 'intelligentzia' pequeño burguesa, más sensible a las interpelaciones de la justicia social, de la soberanía nacional, de la democracia política. De ahí el importante y decisivo papel jugado por lo que genéricamente llamaremos los intelectuales populares, que llenan las filas de las organizaciones políticas de izquierda y de los grupos político-militares.

Es este el escenario donde se instala la crisis. Se cometió así, una y otra vez a lo largo de más de dos generaciones, el error histórico de olvidar, o no advertir a tiempo, que la democracia burguesa descansa en el control e integración de las clases subalternas.

Si la crisis intra-oligárquica definió desde fines del siglo XIX el período de consolidación nacional-estatal, en la década de los setenta de este siglo, es la rebeldía campesina lo que re-califica la crisis y la proyecta como una crisis social. Debe recordarse que la oligarquía centroamericana nunca fue cuestionada en el seno de sus actividades productivas. Las revueltas campesinas sólo ahora, después de la mitad de la década de los setenta, tienen un sentido político preciso. Como ya hemos dicho, el ajuste de cuentas con el estilo oligárquico, despótico, antidemocrático, se intentó en la postguerra. Sin embargo, los movimientos de jaque no fueron jugadas campesinas; la 'clase media' cuando debuta políticamente por intermedio de grupos intelectuales y cuadros políticos, se mueve en referencia al polo

contradictorio -pueblo-oligarquía y más en abstracto, dictadura-democracia. Pero su contestación -partidos y programas de 'clase media'- se movió contradictoriamente entre la búsqueda del apoyo popular, que nunca logró ser campesino, y su "elan" antioligárquico, que nunca logró ser burgués. Así fue hasta bien entrados los sesenta.

De lo que se viene afirmando pareciera deducirse una condición estructural autoritaria en la constitución política de los grupos dominantes en Centroamérica. O planteado a la inversa, una permanente falta de voluntad hegemónica instalada en el período estrictamente agrario de la historia regional y reiterada con vigor en la etapa llamada de 'sustitución de importaciones'. Una lectura de la historia nacional de la región demuestra que ello no es tan cierto. Ni los cafetaleros costarricenses -para resumir el argumento- establecieron desde siempre formas de vida democrática, ni el resto de sus congéneros convocaron a la dictadura como la defensa natural. Sucede que en sociedad de base agraria, la propiedad y uso de la tierra definen no sólo la posición social sino también la ciudadanía y, llevando el argumento al límite, incluso la nacionalidad.⁶ Por ello, la democracia, que es en síntesis forma de organizar el consentimiento, funcionó sin duda a la manera oligárquica, cuando el juego de oposiciones se daba internamente entre caudillos -generales o abogados-, partidos de notables, señores con peones y tierra. Lo que quiere subrayarse simplemente es que el carácter antidemocrático no aparece cuando el consenso de los dominados no entra en la suma que vuelve exacta la cuenta entre aliados y rivales de la misma clase.

La recomposición del bloque en el poder que gradualmente se fue estableciendo en la década de los sesenta, permitió que se enfrentaran así dos concepciones de la democracia. Buscando el mínimo de legitimidad histórica, pero asegurando, aunque estrecho, un espacio para la organización del consenso, se proyectaron regímenes militares fuertes pero de base electoral y con arreglo a la Constitución y, al mismo tiempo, represivos y excluyentes, "prueba elemental de que cuando forma y contenido se separan, pueden surgir mecanismos no democráticos de legitimación y control".⁷ Así los gobiernos que rigen Guatemala y El Salvador, desde 1964 y 1961 hasta 1982 y 1979 respectivamente, fueron gobiernos resultado de un juego político-electoral, aspecto que también Somoza siempre buscó hasta 1974.

Estas "democracias de fachada"⁸ limitaron la escena política a los partidos de derecha y de un centro declinante; mantuvieron la representación/función legislativa en el mínimo de la formalidad constitucional, acrecentaron el papel del ejecutivo, siempre en manos de un militar y no permitieron ninguna forma de oposición de izquierda, ni la organización sindical-campesina, ni prensa de oposición, ni la independencia del poder judicial y electoral. Esta democracia recortada aplicó, además, una activa política de represión violenta, estimulada en lo ideológico por la teoría de la seguridad nacional y en lo técnico, por la aplicación de extensos programas de contrainsurgencia.

Frente a tal concepción, las fuerzas sociales que genéricamente llamamos sectores populares, propusieron otra a través de partidos,

elecciones y programas, la reconstitución de una democracia basada en instituciones jurídicas que consagraran las libertades individuales, los derechos humanos, la competencia política-ideológica con los colores del arco iris natural, la fórmula electoral y sobre todo, el reconocimiento de la soberanía popular. Se buscaba sin duda, una democracia liberal de amplia base participatoria en el que los procesos electorales desempeñaron el papel más importante en la reproducción de la dominación, como el mejor mecanismo de legitimación. Estos proyectos fracasaron todos, por diversas razones locales y en su lugar se instaló, como quedó dicho, un escenario político restringido del cual emergió la crisis.

En resumen, el escenario de la crisis fue construido en el espacio de las luchas democráticas. De fracasos reiterados de procesos electorales, de destrucción legal y física de organizaciones y líderes políticos y, por supuesto, como se ha repetido hasta el cansancio, de la imposibilidad para la organización institucionalizada de la protesta social. No obstante, a la democracia convocan siempre tirios y troyanos. Recuérdese que ningún golpe de Estado, ninguna elección fraudulenta, ningún atropello a la constitución es asumido por sus ejecutores (militares, empresarios, líderes de la derecha) como un acto dictatorial, aplicado en nombre de principios autoritarios. El pretexto es siempre salvar la democracia, el orden, la nación en abstracto. La conducta antidemocrática fue justamente el pretexto para defender la democracia, llevándose entre los pies los valores liberales que la demanda popular no amenazaba.

Los sujetos

A partir de la segunda postguerra los movimientos sociales pueden ser diferenciados claramente si se atiende a la forma de constitución de los mismos, al carácter social del conflicto, vale decir, de los actores que se enfrentan y al camino que recorren en su desarrollo frustrado o exitoso. El carácter genérico fue siempre la rápida politización de la protesta popular, pero al mismo tiempo, la tendencia inevitable a moverse en el marco estrecho y contradictorio de una conducción burguesa y, finalmente, tras objetivos o programas no populares.

Las jornadas populares de marzo-abril de 1962 en Guatemala, y las correspondientes al 26 de octubre de 1960 en El Salvador, se traen a cuenta como una ejemplar movilización social, urbana, radical, pero limitada en sus métodos y en sus propósitos. Ambas son experiencias multitudinarias, con fuerza espontánea de masas, que precipitaron sendos golpes de Estado, sólo para reiniciar así el ciclo fatal de gobiernos de facto, represión popular y luego, una inútil legitimización del régimen político.

Ya hemos dicho en otras ocasiones que la protesta estudiantil fue decisiva por el carácter pequeño-burgués de lo urbano pre-industrial. Cuando los estudiantes universitarios tomaban la calle, en las ciudades capitales de Centroamérica, eran portadores de una protesta social mayor; sus huelgas y sus muertos no siempre fueron para apoyar demandas estudiantiles. También el movimiento obrero apareció como actor de conflictos que partieron de lo particular-

corporativo para politizarse en el cuadro de una aguda represión. Hubo también batallas electorales y cívicas que cobraron vuelo para exhibir, en su frustración, lo estrecho del espacio democrático.

En todos estos movimientos sociales de protesta la contradicción pueblo-clase dominante no alcanza a perfilarse adecuadamente, porque la articulación entre las masas y una vanguardia políticamente esclarecida o es provisional o no alcanza a constituirse. La protesta sólo constituye elemento aislado de crítica política y no se instala como crisis en las relaciones entre los sectores populares y los grupos dominantes de la burguesía. De ahí que tanto la categoría teórica 'pueblo' como la de 'clase dominante' hoy día tengan una significación distinta, precisa. En el pasado, pueblo fue una categoría política para designar un conjunto ambiguo, socialmente indeterminado, utilizado por los programas y las luchas de la izquierda política para hacer la representación sustitutiva de intereses en una escena política calificada por las luchas electorales, por reivindicaciones democráticas. La clase dominante, también llamada 'oligarquía', cobraba perfil por su carácter antidemocrático, por sus métodos tradicionales de dominación social y política.

Las manifestaciones colectivas de descontento, la conducta "subversiva" de las masas populares van cambiando radicalmente de significación como elemento de crítica política cuando aparecen o surgen finalmente articulados a la lucha armada de masas. El fenómeno de la guerrilla, vinculada de diversas maneras al movimiento de masas, resuelve de manera original -en Centroamérica- el problema complejo de la vanguardia y la dirección

política de las masas. En otras palabras, la contradicción pueblo-clase dominante, substantiva en el análisis y en la comprensión de la crisis centroamericana, va alcanzando su total significación social, política, cultural y militar a lo largo de los setenta, hasta el momento de la victoria sandinista.

En efecto, el fenómeno de una lucha armada de clases es un hecho nuevo, que niega, en la medida que supera tanto las experiencias guerrilleras de la década de los sesenta, como todos los movimientos sociales ocurridos a partir de la postguerra, a lo que se hizo brevíssima referencia página atrás. Habría que puntualizar dos hechos, de diferente carácter, en este tema de la vanguardia-masas a partir de la experiencia centroamericana.

El primero es la distinción que es obligado hacer entre el movimiento social de protesta, por un lado, y las llamadas organizaciones político-militares, por la otra. Aunque puedan tener las mismas causas, su origen temporal y las formas de manifestación espacial, son diversas e influyen desigualmente en la constitución del sujeto social de la crisis revolucionaria. El origen del movimiento social es el profundo malestar por la manera como el sistema capitalista, en la periferia, explota y domina a inmensos sectores sociales. A la mayoría social del conjunto nacional. El origen de la organización guerrillera es, justamente, la existencia y las diversas experiencias del movimiento social, cuya vanguardia constituyen. De ahí que no sólo haya diferencias en el tiempo de constitución sino que el movimiento social es 'más grande' que la estructura política rebelde.⁹ El momento político-militar se desarrolla como respuesta a

las dificultades con que tropieza la lucha democrática. Tal como se indicó en la primera parte de este trabajo, de las reivindicaciones democráticas se pasa a la denuncia del sistema que no las garantiza.

El segundo hecho es la distancia-integración de los movimientos sociales con las estructuras político-militares. Estas, crecieron de tamaño y significación solamente en la medida en que fueron capaces, o de surgir de las luchas populares, o de impulsarlas como condición constitutiva. Las experiencias históricas ofrecen un espectáculo múltiple y hasta contradictorio, de una riqueza que subraya las múltiples facetas que adquiere tanto la constitución de una vanguardia -que supone fuerzas sociales movilizadas- como la conformación de las masas populares. De nuevo, la experiencia nicaragüense resulta la más completa, pues el Frente Sandinista sólo puede constituirse en vanguardia cuando logra ponerse a la cabeza del amplio movimiento antisomocista primero y de combinar las más diversas formas de lucha, después. El FSLN estuvo escindido en tres tendencias de desigual fortuna movilizadora, pero que cumplían funciones complementarias, todo lo cual facilitó la unidad orgánica y con ello, su real constitución como fuerza rectora del movimiento popular.

La experiencia de Guatemala y El Salvador es distinta. Sin embargo, en ambas sociedades están presentes las mismas causas del enorme descontento social, de viejo origen y de múltiples formas. Hay organizaciones político militares que han creado su propio frente-de-masas, (sindicatos, organizaciones estudiantiles, barriales, campesinas, etc.), y otras que han logrado vigorizar las ya existentes.¹⁰ La promoción del movimiento sindical urbano y sobre

todo, de las diversas formas de existencia orgánica del campesinado pobre y medio en Centroamérica, sin embargo, no fue obra de la voluntad guerrillera. Tal vez habría que afirmar lo contrario. La organización político-militar surgió y ha sabido expresar las aspiraciones e intereses del movimiento popular, no solamente representar el sentido de tales intereses, por la vía sustitutiva, como en la experiencia foquista de la década de los sesenta. En los hechos, tal como lo afirma Aguilera, el sujeto colectivo de la revolución está personalizado en la vanguardia y "esta es auténtica en la medida en que es capaz de expresar en la lucha y en el programa las aspiraciones y demandas de los diversos elementos..."¹¹

Todo cuanto se ha dicho es sólo parte de la explicación del proceso histórico de la crisis política de la región, que va quedando definida a lo largo de tantas veces mencionada década de los setenta. Al examinar el carácter de clase de las luchas sociales no siempre aparece definida claramente la lucha de clases. En rigor, la contradicción básica que hemos venido manejando, pueblo-clase dominante y que puede ser sustituida ahora por la de pueblo-bloque de poder no expresa una contradicción clasista. La vinculación antagónica que enfrenta en la relación de producción a las dos clases fundamentales del modo de producción capitalista es el fundamento de la lucha de clases, en cualquiera de sus niveles. La 'lucha' por la plusvalía expresa la relación y el antagonismo entre capitalistas y obreros, lo cual supone que ambas clases sólo se definen en el conflicto por aumentar o reducir el tiempo de trabajo necesario.¹² Pero esta contradicción ni está presente sola ni es suficiente para

explicar la dinámica de los conflictos políticos que hemos calificado de movimientos popular-revolucionarios.

La movilización popular-revolucionaria, como se produjo en Nicaragua con el triunfo sandinista, o como ella se manifestó en diversos momentos en El Salvador y Guatemala entre 1979-1981 especialmente, no es resultado de un mero antagonismo de clase, ni agota su explicación en la mencionada contradicción capital/trabajo. La fuerza del movimiento obrero está presente pero en el seno de una movilización popular donde participan otros sectores sociales, especialmente las diversas fracciones del campesinado, sectores obreros de diverso grado de salarización, pequeña burguesía empobrecida, intelectuales, etc. No es una lucha de clases en el sentido clásico porque el antagonismo -y las ideologías que lo expresan- define a los polos opuestos de otra manera: los sectores dominados no se identifican así mismos como explotados sino como sectores subalternos. Se definen frente al bloque de poder (las fracciones dominantes de la burguesía conjuntamente con el ejército y el apoyo norteamericano) como lo opuesto a esa fuerza.

Se plantea así un antagonismo político radical que se monta sobre las diversas formas de la reivindicación económica pero las subsume y, por lo tanto, no lleva al enfrentamiento directo con el burgués explotador sino con el régimen político y con sus aparatos materiales de represión. Los conflictos sociales se producen ciertamente en distintos lugares de la estructura de la sociedad, pero cobran forma solamente en sitios donde no aparece la clase, sino el Estado de clase.

La movilización popular-revolucionaria que conforma esta abigarrada coalición social que hemos llamado pueblo y que constituye el sujeto social de la revolución centroamericana, corresponde no solo a una contradicción fundamental sino también a una determinada forma de interpelación ideológica. Utilizamos aquí la concepción althusseriana según la cual la función de toda ideología consiste en que interpela/constituye a los individuos como sujetos.¹³ Sujeto, así, sería el individuo que cobra conciencia de su condición definida por su oposición a otro y se convierte por fuerza de la conciencia en actor de tareas que vive y ejecuta como si fuera él mismo su propio determinante. Es justamente la naturaleza de la ideología popular-revolucionaria lo que convierte al sujeto en pueblo. El pueblo o los sectores populares "no son, como algunas concepciones suponen, abstracciones retóricas o la introducción de contrabando de una concepción liberal o idealista en el discurso político marxista. El 'pueblo' es una determinación objetiva del sistema, que es diferente de la determinación de clase...".¹⁴

En efecto, como hemos dicho en páginas anteriores, el pueblo es uno de los polos de la contradicción dominante, cuya constitución es posible no sólo a partir de sus determinaciones sociales sino especialmente por el conjunto de relaciones políticas e ideológicas que surgen al enfrentar el bloque de poder. La ideología popular-revolucionaria, que sitúa el problema de las clases en lucha en el terreno político, determina la naturaleza del sujeto. Para que una interpelación popular constituya al sujeto-pueblo, debe éste

producirse en el cuadro de una relación antagónica con el bloque de poder.

Es necesario examinar, sin embargo, las determinaciones sociales del sujeto popular que se constituye cuando una ideología popular-revolucionaria lo moviliza para las luchas contra el sistema, y analizar también las condiciones históricas coyunturales en que todo esto puede producirse. De otra manera, se estaría afirmando que solamente la fuerza ideológica por sí misma sería capaz de determinar el curso de las cosas o bien habría que caer en el simplismo de decir que la revolución centroamericana es una revolución proletaria pero no dirigida por el proletariado.¹⁵

Señalemos, en primer lugar, que se trata de sociedades en donde el campesino es aún mayoritario, y se encuentra retenido en una multiplicidad de formas productivas entre el autoconsumo cada vez más difícil o la incompleta incorporación al mercado. La existencia de formas no capitalistas de producción en el agro, tales como la pequeña propiedad familiar, diversas formas de aparcería y rentas-precapitalistas, vinculaciones personales, inserción no asalariada en la producción o incompleta en términos temporales y productivos, etc. El crecimiento del capitalismo agrario ha depauperado a la población campesina, sin proletarizarla sino a medias, produciendo una extendida zona humana de asalariados temporales y campesinos sin tierra y conocidos genéricamente como "semiproletarios".

Señalemos, en segundo lugar, que son sociedades donde el proletariado es pequeño en cantidad y sin mayor experiencia orgánica-política. Se trata de un proletariado urbano pero de reciente origen

rural, que se confunde estructuralmente en sus límites, con un sector artesanal de poca capacidad acumulativa y productiva, y más aún, con un inmenso sector poblacional que se mueve entre el salario de subsistencia en el sector de la producción y el ingreso mínimo en el de la circulación. La estratificación del ingreso, a partir de las múltiples formas de inserción laboral y productiva en el sector urbano, ha multiplicado las modalidades de existencia social de la pobreza urbana. Es este un mar de sub-ocupados, ocupados temporales, asalariados permanentes de bajo ingreso, servicios marginales, comerciantes de acera, etc., etc., la ubicación del proletariado industrial resulta de una significación muy relativa.

En tercer lugar, ha habido una ampliación y modernización relativa del sector de los servicios, especialmente un crecimiento de las funciones del estado, de los entes públicos y descentralizados; de la inscripción universitaria y secundaria y una multiplicación de pequeños o grandes centros de educación privada, todo lo cual ha generado una masa media de población que se estratifica desigualmente por su ingreso, pero sobre todo por las formas que adopta el consumo.

A riesgo de repetir una vez más lo que es conocido, debe subrayarse que el proceso histórico del capitalismo subdesarrollado no disuelve ni absorbe las llamadas formas no o pre capitalista de producción, sino que las recrea/integra en su dinámica, señalando sin duda, sitios de desarrollo desigual que se combinan con el surgimiento de una industria monopólica y de un sector financiero moderno y estrechamente vinculado a las corporaciones extranjeras dominantes.

Todos estos sectores sociales viven su condición de pobreza identificados como "los de abajo", compartiendo en diverso grado con el proletariado y los campesinos, no tanto una situación de explotación económica sino de subordinación social y política. Se definen, en consecuencia, no sólo por sus modalidades de existencia social sino porque su identidad se alcanza a través de la interpelación ideológica de lo popular-revolucionario, que las constituye en sujetos de una práctica contestataria. Pero es la naturaleza radical y violenta de esta praxis la que completa la definición de lo popular, lo que conjuga sus intereses de clase y los condensa en una fuerza social de la que el sujeto histórico de la revolución es portador.

El carácter de la interpelación popular-revolucionaria no se produce pues, en el vacío. Se origina en el carácter dual de la crisis que vive Centroamérica y que hemos calificado, primero, como el deterioro de la dominación "oligárquica" y sus dificultades para dar paso a la democracia burguesa; y cuando las luchas por estas formas políticas y por el progreso social se frustran, la crisis se confunde con un desafío al orden burgués, que es, ya, una crítica al sistema capitalista mismo. Es decir, el campo de las luchas popular-revolucionarias son expresión de la crisis oligárquica tardía, conjugada con la crisis del orden burgués, prematuro y sólo puede desarrollarse ahí donde la clase obrera no pudo ser integrada (manipulada, cooptada u otro medio de control de clase) a los mecanismos pre-establecidos de la democracia liberal.

Pero la clase obrera vive las mismas experiencias de los otros sectores, tales como la imposibilidad para intentar la mejora de sus

condiciones generales de existencia; la minusvalía social, la pobreza aguda y la violencia política, ya no sólo son experiencias del campesinado, cuya participación es mayoritaria, decisiva y fundamental. Los actores del conflicto, paulatinamente incorporados, gradualmente conscientes y en diversos momentos de una condición pre o proletaria, no son todos víctimas de la explotación económica, aunque como un vasto conjunto social sufre en diverso grado los efectos políticos, sociales y culturales de una violenta dominación de clase, que se mantiene por el uso sistemático de la fuerza, y que históricamente ha dado abundantes muestras de incapacidad para resolver los problemas de la existencia popular. Hay, a partir de esta constatación, un comienzo de conducta anti-sistema; el desarrollo de la crisis transforma finalmente el sentido común en conciencia crítica. Es esta una posibilidad fluida, tal vez un abanico de múltiple colorido y de muchas guías, en el que caben desde el elemental descontento gremial-corporativo hasta la voluntad partidaria de la toma del poder.

Podemos resumir de la siguiente manera el conjunto de rasgos ideológico-políticos de la interpelación popular revolucionaria:

- Una demanda anti-dictatorial, democrática, resultado de las largas luchas por alcanzar alguna forma de integración política frente a las dictaduras. Son luchas contra el despotismo policial, la arbitrariedad burocrática, la permanente carencia de derechos. La contradicción democracia/dictadura corresponde a la que enfrenta al pueblo

con el bloque-de-poder. Si es cierto que una ideología no nace sino en las condiciones sociales de existencia social, de sus portadores, de sus prácticas, lo anti-dictatorial y anti-autoritario constituye el elemento ideológico más inclusivo. El llamamiento a la democracia presupone un objetivo de construir un poder popular y democrático.

- Una demanda anti-oligárquica, que en cierta forma se confunde con la reivindicación anterior. Las luchas por la tierra forman parte de la tradición más sentida de la población centroamericana y ha sido la causa más permanente de conflictos locales. El problema de la tierra es el problema campesino, vale decir, de los efectos sociales, económicos y culturales que crea el capitalismo en el agro, que se han agravado y no resuelto con el avance de las fuerzas productivas. No es ésta la vieja demanda anti-feudal del reparto terrateniente sino la búsqueda de un nuevo horizonte para el conjunto de la sociedad.

- El carácter anti-imperialista es esencial en el discurso popular y aunque varía en función de raíces históricas más o menos profundas, corresponde a una forma básica de identidad nacional y popular. Aquí, la contradicción nación/imperialismo revela también toda su dimensión transclasista, pues en lo popular revolucionario hay una definición nueva de nación, de independencia y soberanía nacional. En rigor, la cuestión nacional es la búsqueda de construir un Estado nacional independiente y democrático. Si tomamos en cuenta que esta

óptica no excluye las dimensiones étnica, cultural, lo psicológico-colectivo, etc., se trata de un problema de poder, de un proyecto que sólo adquiere sentido con la movilización popular-revolucionaria.

- Los movimientos sociales y sus expresiones político-militares son un ejemplo de un recorrido de múltiples entradas, en el que todos los caminos conducen a una 'appeal' anti-statu-quo, a un gradual o súbito rechazo del orden político-social que ha desorganizado y empobrecido millones de vidas. El horizonte socialista, más que el programa socialista, es un rencor multitudinario contra ese orden que la crisis se encarga de exacerbar a través de la intolerancia de los poderosos, de la condición subalterna de los dominados, de la impotencia frente a la primera experiencia militar. De ahí que a contrapelo del más ortodoxo sentido marxiano -que funda en el desarrollo de las fuerzas productivas la potencialidad socialista- el socialismo sea sobre todo una imprecisa referencia intelectual a una sociedad justa. Una idea moral o una construcción ética, alimentada en la realidad oscura y sin futuro del capitalismo centroamericano.

Los programas de las organizaciones de masas o de los frentes multclasistas expresados en la conducción político-militar, más que señalar con precisión el socialismo, subrayan en su voluntad de poder la urgencia de un orden político distinto: un Estado popular, democrático, nacional. El atraso social ya no produce sueños

milenarios pero el sueño de justicia se apoya en los viejos ideales de la dignidad humana rescatada, la solidaridad entre los desheredados, la libertad y la igualdad de todos, la perfectibilidad de las relaciones sociales y también, la democracia, la independencia nacional. Hay en todo esto un haz de reivindicaciones subrayadas con desigual compromiso; así, encontramos un socialismo cristiano junto al sueño igualitario del campesino, en una fórmula que va más allá del derecho a la tierra; o a la reorganización radical del mundo del trabajo y la búsqueda de una nueva racionalidad para la vida económica y, por supuesto, los más próximos al marxismo, afirman la necesidad de un nuevo poder para construir una nueva convivencia civilizada.

Conviene hacer dos precisiones casi para finalizar. Una, es que la unidad ideológica del discurso popular-revolucionario puede ser perfectamente compatible con un amplio margen de incoherencia lógica, no sólo porque ella está sujeta a las diversas vivencias, percepciones y prácticas de los grupos populares, sino también a las diversas interpelaciones políticas (marxistas) y religiosas (teología de la liberación) que confluyen en las actuales prácticas político-ideológicas. La toma de conciencia y la constitución del sujeto revolucionario es pues un proceso contradictorio en el que no sólo cuentan las determinaciones de la estructura. Otra, es que como la crisis es también ideológica -y la quiebra del racismo guatemalteco es sólo una prueba- los grupos sociales que se incorporan, lo hacen viviendo de manera aguda la reestructuración de su campo ideológico, que implica una crítica generalizada al sistema existente y "cuando más difusos sean sus 'intereses objetivos' y menos desarrollado su

'instinto de clase' más tenderán a vivir el proceso de resolución de la crisis en el puro nivel ideológico".¹⁶

Este aspecto, finalmente, tiene que ver con el rasgo quizá más original del sujeto social de la revolución: la mayoritaria presencia campesina y de otros sectores sociales que se incorporaron a la lucha política por intermedio de una toma de conciencia que fue religiosa en su origen. No hay duda que la identidad se construye a través de un proceso que parte del hecho religioso, que despliega su potencialidad en el campo de las reivindicaciones socio-económicas y termina por constituirse en el nivel político. En tal sentido, no es lo religioso lo que genera efectos políticos pero en tal dirección debe contabilizarse el enorme esfuerzo de 'desbloqueo' de la conciencia que se produce por acción consciente y directa de los grupos religiosos. Según Cabarrús, el proceso tiene dos momentos, la "conversión religiosa", que sería "una forma nueva para comprender la religión, como una fe en la historia y para el compromiso, que desemboca y prepara la "conversión política". Así fue la secuencia cronológica".¹⁷

Lo específico de lo religioso no es posible de señalar en esta oportunidad, pero es fácil determinar que hay una organización y una práctica religiosa, que según Andrés Opazo, propone un juicio religioso del orden político, estimulando así una praxis revolucionaria.¹⁸ Es decir el contenido religioso, ahora, es puesto al servicio popular, en tanto formula críticas y busca soluciones al orden capitalista. En sociedades políticamente bloqueadas, como calificamos a algunas de Centroamérica, ciertas luchas sociales además encuentran espacios inéditos (las iglesias u otros sitios de

carácter religioso). Los cristianos contribuyen a dar un contenido ético, vigoroso, a la interpelación popular y refuerzan sin duda el carácter multclasista que ya señalamos, esencialmente por su insistencia en el 'pueblo oprimido', en los desheredados convocados ahora a una práctica social de liberación.

Desenlace

La crisis revolucionaria tiene una dimensión temporal y diversas formas de resolverse. La crisis centroamericana tuvo su desenlace en la experiencia nicaragüense. Fue ésta, una salida revolucionaria a la crisis y fue el resultado de una conjugación original entre el descontento de las masas y las formas orgánicas de la conducción política y militar. En la lucha contra el régimen somocista apareció el Estado y tras éste, el sistema de dominación en su conjunto, sistema del que formaba parte en medida hasta ahora conocida, el imperialismo norteamericano.

La derrota de Somoza fue una derrota para una parte importante de la burguesía. La disolución de la Guardia Nacional ejemplifica con sobrada evidencia que una burguesía sin ejército no es burguesía. La clase se unifica y perfila en el ejercicio del poder. No administrando el régimen sino conduciendo el Estado. Pero la burguesía nicaragüense era, en relación a sus sectores subalternos, una burguesía débil porque no logró crear un Estado socialmente fuerte, por un lado, y porque no logró cohesionarse en el transcurso de la crisis, por el otro. La atrasada superestructura política, la excesiva dependencia del crédito norteamericano, (no sólo del monetario, sino

también del moral), la personalización del poder, hicieron de la victoria sandinista contra Somoza una ruptura histórica del sistema.

El logro de la hegemonía popular en el campo de las luchas democráticas se alcanzó en Nicaragua en la etapa final del proceso y fue resultado de una compleja relación de fuerzas, en un proceso en que el movimiento social y la organización revolucionaria se desarrollan y se articulan para el asalto final. La revolución salvadoreña y guatemalteca ofrecen experiencias distintas en este aspecto. El descontento popular tiene en ambos países orígenes sociales más acusadamente campesinos. Es diversa también, después de 1980, la múltiple imbricación entre el movimiento social, de masas, y las vanguardias orgánicas. Los rasgos generales de los procesos críticos en los tres países bajo análisis ceden en importancia a los caracteres particulares, una vez que el desenlace se ha producido en uno de ellos.

El desenlace de la revolución centroamericana en Nicaragua, que señala un inevitable punto de inflexión en todo el conjunto del proceso regional, tiene efectos de diversa longitud en las luchas populares en El Salvador y Guatemala, en el funcionamiento de la precaria y disminuida democracia hondureña y en el destino de la mayor democracia burguesa de América Latina: Costa Rica.

La experiencia nicaragüense de los últimos cuatro años resuelve adecuadamente el problema de la aparente indeterminación entre clase social, crisis e ideología, necesaria no para calificar previamente la naturaleza del proceso revolucionario sino para aclarar el sentido en que el mismo se mueve. En una etapa avanzada del proceso lo

popular-revolucionario aparece paulatinamente convirtiéndose en un discurso ideológico de clase; cuando la lucha de clases aumenta -y ello puede suceder antes o después de la victoria frente al bloque de poder y su estado- sobredetermina el conjunto de las otras contradicciones y contribuye a precisar el proyecto político, como proyecto-de-clase prefigurado en las demandas, programas y reivindicaciones del movimiento social y de las vanguardias orgánicas.

La interpelación popular-revolucionaria, capaz de constituir un sujeto multitudinario y trans-clasista, adquiere un contenido de clase porque, aunque de hecho, siempre articula discursos ideológicos de clase, a veces con cierta incoherencia lógica, es siempre congruente con la radical oposición pueblo-bloque de poder. No debemos olvidar, si es cierto el razonamiento de todo este trabajo, que cualquier clase lucha a nivel ideológico tanto como clase y como pueblo, es decir, presentando sus objetivos de clase como sustanciación universal de objetivos populares, nacionales. La crisis del orden dominante es justamente la ruptura de o la imposibilidad para el consenso. La crisis de hegemonía es esencialmente pérdida de coherencia del discurso ideológico dominante y la contrapartida de esa carencia es la constitución de una contra-hegemonía popular. De lo popular revolucionario como lo opuesto directamente a aquélla.

En el momento del desenlace, según lo prueba la revolución nicaragüense, el asalto al poder opresor "convoca a los más amplios sectores sociales sometidos por él, independientemente del contenido de clases del proyecto histórico".¹⁹ El sujeto social se convierte en el sujeto histórico, tal como lo señala acertadamente Vilas, que es tanto

como reconocer la diferencia entre la naturaleza sociológica del pueblo revolucionario y el proyecto político de clase, que determina el sentido en que aquél se mueve. Es pues, el tránsito de lo popular a lo proletario, de la prefiguración de la nueva sociedad que se va a construir, a partir de la sociedad que se ha estado negando.

El orden imperante establece estructuralmente la dimensión de la ruptura, pero su posibilidad es de naturaleza histórica. En otras palabras, el descontento que se origina en el conjunto de la vida social por ser una reacción contra la realidad existente está limitado objetivamente por esta última. La revolución centroamericana, -la crisis guatemalteca salvadoreña en particular- se encuentran en una encrucijada hoy día (1984) marcada por la revolución nicaragüense y por la respuesta que ella ha provocado internamente y en el contexto geopolítico internacional. En los hechos, la crisis no tiene en sí misma inscrita una solución, pues son los sujetos sociales enfrentados los que al medir sus fuerzas encuentran el camino.

De ninguna manera es posible intentar predicciones sobre el futuro. La noción de desenlace tiene por base la predicción clásica de que la humanidad siempre se plantea sólo aquellas tareas que pueden ser resueltas, lo cual a su vez remite a otra noción marxista de que bajo determinadas circunstancias históricas, son los hombres los que hacen su propia historia. En el marco de la crisis centroamericana, el desenlace tiene un doble referente. Por un lado, la manera como se constituye el sujeto histórico del cambio, determina el curso que éste puede dinamizar; por el otro, es el proceso mismo el que al desarrollarse exhibe las potencialidades futuras. El sujeto se

organiza en función de otro, de una contradicción esencial, sobredeterminada por la 'comprensión del futuro', es decir, por las metas, los propósitos, los objetivos. En suma, la utopía que se define en el curso de las luchas.

El ambiente abiertamente contrarrevolucionario en que se mueve la crisis hoy día, el grado de conciencia adquirido y las lecciones aprendidas, han llevado a los grupos dominantes de Centroamérica y de sus aliados internacionales, a elevar no sólo los niveles de violencia y polarización del conflicto, sino a la búsqueda de desenlaces igualmente limitados de las estructuras en que se mueven. Hay una voluntad de permanencia del status quo que implica también algún género de cambio. La burguesía centroamericana no lo busca todavía porque en el seno del conflicto social en que se encuentran, cualquier concesión es la derrota. Necesitan derrotar primero al movimiento popular para abrir algunos modestos espacios de democracia y reforma. La historia enseña, sin embargo, que en campo ensangrentado por una derrota popular no florece la democracia, sino una dictadura aún peor.

Asistimos hoy día a intensos esfuerzos de recomposición de las fuerzas de la burguesía dominante, sólo para volver presentable un aspecto exterior deteriorado por años de represión, corrupción e ineficacia. El tiempo de las soluciones reformistas está pasando o precluyó. En todo caso, para que algunos cambios puedan hacerse exitosamente y disminuir las presiones sociales reales, se requiere, de nuevo, la derrota del movimiento popular. Es decir, convertir el proyecto popular revolucionario en un objeto de museo. La situación

en Guatemala y El Salvador, está lejos de pasar al archivo de la historia. Por la manera como la política norteamericana agrade a la revolución nicaragüense, afirmamos que la amenaza de intervención militar, directa, constituye el riesgo mayor. Un riesgo regional en el que su materialización de tal peligro ya no representa un desenlace, sino una derrota para todos.

ENDNOTES

- 1 De nuevo, como en otros trabajos similares, debemos anticipar el carácter limitado de este análisis, que se refiere a las situaciones nacionales de El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
- 2 Este tema ha sido extensamente tratado por Carlos Alberto Sarti, en su ensayo "El Proceso de Estructuración de la Dictadura Militar," Polémica No. 7-8, San José, Costa Rica, 1983, p. 16.
- 3 Cf: N. Poulantzas. Poder Político y clases sociales en el Estado capitalista. México, Siglo XX, Ed. 1977, p. 415-17.
- 4 P. Salama, el Estado capitalista como abstracción real, en Críticas de la Economía Política, No. 12/13, Ed. El Caballito, México, D.F., 1979, p. 78.
- 5 Op. Cit., p. 97.
- 6 Los indígenas guatemaltecos y seguramente extensos segmentos campesinos de las otras sociedades de la región, nunca experimentaron ni expresaron tal pertenencia en el pasado. Tenemos dudas acerca de sus formas contemporáneas de identificación por cuanto ellas tienen, por un lado, un componente lingüístico que más bien fragmenta cualquier horizonte universal y, por el otro, se apoya en una estructura local de explotación y autoridad que dificulta la percepción clasista y nacional. Pero este, decisivo aspecto de la vida política guatemalteca, es harina de otro costal.
- 7 Estos temas están desarrollados en Vida y Muerte de Guatemala: Reflexiones sobre la crisis y la violencia políticas, en Crisis del poder en Centroamérica, EDUCA, San José, 1981.
- 8 Es sugerente el análisis sobre este punto que hace M. Solórzano Martínez, en Centroamérica: democracias de fachada, ponencia presentada al X Congreso Latinoamericano de Sociología, Managua, 14-18 octubre, 1983.
- 9 Reflexiones, en Servicio Informativo ALAI, No. 43, 12 septiembre, 1983, p. 1. Con agudeza, se señala que "una parte importante de los elementos que generaron su dinámica de crecimiento (del movimiento social) y de articulación, no estuvo supeditada a las estructuras partidarias".

- 10 En El Salvador, como es sabido, existe bien establecido el dualismo brazo armado/organización de masas, aunque no siempre fue clara la dirección en que se movió la flecha constitutiva. Es decir, ¿cuál es la criatura original? Pero esto es secundario porque lo decisivo es la articulación entre las masas y su dirección. En Guatemala, tal paralelismo organizativo no existe, y es variado el repertorio de experiencias, hasta incluir una organización político-militar que programáticamente rechaza la concepción de masas dirigida por una instancia armada, pues afirma que en la crisis actual, tal división es perjudicial, proponiendo una concepción de masas armadas en lucha.
- 11 G. Aguilera, "El nuevo sujeto de la lucha popular en Guatemala", ponencia presentada a las Jornadas Internacionales de Estudio sobre las luchas de liberación nacional, Roma, diciembre, 1983, p. 30.
- 12 Este aspecto está señalado de manera preliminar en el trabajo del autor, ¿Quién destapó la Caja de Pandora? Reflexiones sobre la crisis y el conflicto en Centroamérica, ponencia inaugural en el V Congreso Centroamericano de Sociología. San José, octubre, 1982.
- 13 L. Althusser, Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, en La Filosofía como arma de la revolución. Hay diferentes ediciones.
- 14 E. Laclau, Política e ideología en la teoría marxista, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, p. 122.
- 15 Otro problema es el de saber si la ideología proletaria está presente, actualizada, en los programas y en la teoría que anima la revolución centroamericana. Se puede entrever el horizonte socialista y las luchas por él sin que previa o necesariamente tenga que existir un proletariado dirigente.
- 16 E. Laclau, op. cit., p. 117.
- 17 Este proceso se encuentra bien analizado en Carlos Rafael Cabarrús Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador, Ed. de la Casa Chata, No. 16, México 1983, pág. 362. En otro trabajo, resumen del libro citado, Cabarrús indica que fue "importante el desbloqueo de la religiosidad tradicional, la superación de la conciencia mágica y la transformación del sentimiento religioso en una conciencia colectiva para el compromiso cristiano en la historia". C.R. Cabarrús, "De movimiento campesino a

revolución popular", Managua, septiembre, 1983. Son importantes en este tema J. Cáceres, R.M. Pochet, A. Opazo y O. Sierra, EDUCA, San José, 1983; Iglesia, Política y Profesía: Juan Pablo II en Centroamérica, de A. Opazo, Religión y Proyecto Político en Centroamérica, en la revista Vida y Pensamiento, s/f y todos los materiales publicados en Estudios Sociales Centroamericanos, No. 33, San José, Costa Rica, 1982.

- 18 Andrés Opazo Beruda. Movimientos Religiosos Populares en Centroamérica. San José, C.R. A mimeógrafo, p. 7.
- 19 C. Vilas, El Sujeto Social de la Insurrección Popular y el Carácter de la Revolución Sandinista. Managua, agosto, 1983, p. 31-32. Es este un análisis fundamental para la comprensión del proceso nicaraguense.